Globethics Repository



¿Hábitos del corazón? [¿Habits of the Heart?]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Acosta Silva, Adrián
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-08 22:00:55
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218799

Nueva Sociedad
Separatas

Adrián Acosta Silva

¿Hábitos del corazón? Corrupción política y escándalo en México.

Artículo aparecido en Nueva Sociedad 191, mayo-junio 2004, pp. 16-24.

NUEVA SOCIEDAD

coyuntura

¿Hábitos del corazón?

Corrupción política y escándalo en México

Adrián Acosta Silva

Los escándalos de corrupción política ocurridos en México colocaron nuevamente un viejo tema en la discusión nacional y latinoamericana: el de la relación de las instituciones políticas con los comportamientos partidistas en el contexto de las democracias realmente existentes. Las notas siguientes exploran los recientes escándalos políticos, ofreciendo un contexto de interpretación y análisis. La idea central es que la crisis de la política y de los partidos forma parte de un proceso de debilitamiento del horizonte normativo de la democracia mexicana, que se despliega en dos dimensiones: la debilidad de las instituciones representativas, y el predominio del pragmatismo político de los actores.

Los escándalos políticos ocurridos en México en el primer trimestre de 2004, producidos por una serie de videos difundidos por la televisión comercial entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo, tuvieron un impacto severo en la opinión pública y en el régimen político nacional. Aunque los acontecimientos del agónico invierno mexicano no afectaron directamente al partido en el Gobierno (Partido Acción Nacional, PAN), ni a

Adrián Acosta Silva: sociólogo mexicano, doctor en Ciencia Política por Flacso-México; investigador del Cucea - Universidad de Guadalajara; acaba de publicar *Una modernización anárquica*, Iesalc / Unesco / U. de G., México, 2004; @: <aacosta@cucea.udg.mx>.
Palabras clave: sistema político, cultura política, corrupción, México.

su principal oposición (el Partido Revolucionario Institucional, PRI), los actos de corrupción sí afectaron a dos de los otros partidos de oposición que configuran el mapa político mexicano actual: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), gobernante en el Distrito Federal y en otras cinco entidades federativas, y cuya orientación e identificación ideológica puede considerarse de izquierda, así como al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), agrupación vagamente identificada con el ecologismo. Inesperadamente, los efectos de los escándalos alcanzaron una dimensión internacional, al colocar al borde de la ruptura las relaciones de los gobiernos de México y de Cuba. Aunque las sospechas y prácticas de corrupción en la política sean polvos de viejos lodos en la política local, la fuerza mediática que asumieron esas prácticas aún después de la alternancia política ocurrida en 2000 puso en entredicho la capacidad de las instituciones y de la joven democracia mexicana para inhibir o desplazar el peso específico de la corrupción política en la legitimidad y credibilidad del nuevo régimen. Los hechos colocaron también a los partidos en el centro de las reacciones de desconfianza de muchos ciudadanos respecto de la capacidad de la democracia realmente existente para resolver los problemas de la sociedad. Los escándalos de marzo y sus secuelas pueden interpretarse en dos claves. La primera es la fragilidad institucional de la actual democracia; la segunda tiene que ver con los límites del pragmatismo político de los actores de la posdemocracia mexicana. Ambas claves quizá puedan ayudar a comprender o a descifrar la complejidad de esta coyuntura política y sus principales focos de tensión.

El contexto

La experiencia de la alternancia política mexicana ocurrida luego de las elecciones federales de julio de 2000, significó el reconocimiento nacional e internacional de que la transición política mexicana había llegado a buen puerto. La salida pacífica del PRI de las oficinas del Palacio Nacional, luego de 70 años de ocuparlas, y la llegada del PAN al cetro y al centro mismo de la política mexicana, como producto de la acción ciudadana respaldada por un sistema electoral legítimo, reconocido y valorado por todos los actores de la larga transición (representado por el Instituto Federal Electoral, IFE), significó la culminación de un proceso de cambio que se había cocinado a fuego lento durante casi 25 años. Con la construcción de un sistema de partidos moderado, centrado en tres grandes organizaciones (PAN, PRI y PRD), cuyo funcionamiento electoral ha logrado producir ciertos equilibrios en el Congreso, y experiencias de gobiernos divididos en varios estados, la transición política mexicana pudo fluir en un clima de estabilidad y reformas graduales que culminaron en la derrota electoral del PRI.

Esa interpretación del cambio político mexicano implica considerar no solamente la sensación de hartazgo que el largo dominio del PRI había generado entre millones de ciudadanos, sino también el hecho de que la oposición política creció y se consolidó justamente creando entre la ciudadanía expectativas razonables en torno de la posibilidad, o la certeza, de que el cambio político democrático traería consigo un fortalecimiento de la vida republicana, una mejoría económica y un desplazamiento radical de las legendarias prácticas de corrupción en la vida política y social del México posrevolucionario, periodo en el cual se estructuró el esquema de dominación política del PRI. Como en todo proceso de cambio político, esa combinación de hartazgo con ilusiones y expectativas cívicas en y sobre la democracia y la alternancia político-electoral, produjo en el contexto mexicano una poderosa fuerza que finalmente se expresó en un cambio de régimen en el cual no solamente fue sustituido un partido en el poder por otro, sino que las bases mismas de estructuración del viejo régimen revolucionario –centradas en el hiperpresidencialismo y el control corporativo virtualmente monopartidista– fueron demolidas por una suerte de «redescubrimiento» del Congreso, la edificación de numerosos contrapesos al Poder Ejecutivo, y la formación de organizaciones políticas basadas en la competencia electoral y la búsqueda de clientelas electorales fundamentalmente no corporativas.

La expresión del cambio político se plasma en la composición de la representación política nacional y local resultante de las últimas elecciones federales de 2003, en la que los tres grandes partidos se la distribuyeron, como sucede por lo menos desde 1997. Con la confirmación de que el fenómeno del gobierno dividido llegó junto con la transformación democrática del país, la oposición al PAN representa la mayoría relativa del Congreso Federal, lo que se refleja en las escalas estadales y municipales. El forcejeo político que ha tenido lugar en ese escenario en los últimos cuatro años entre los poderes y entre los partidos, ha generado enormes tensiones no solamente en decisiones clave de la economía y las finanzas públicas (como por ejemplo la reforma fiscal o la reforma eléctrica, que hasta ahora no han podido ser abordadas y resueltas, pese a su señalada importancia por todas las fuerzas políticas), sino también en un conjunto de decisiones mínimas en torno de procedimientos, nombramientos diplomáticos, tormentas discursivas acerca de desafortunadas declaraciones presidenciales, o conflictos internos de los partidos. Con todo, y frente a la veces irritante incapacidad para adoptar acuerdos y formar coaliciones políticas estables o puntuales, el sistema político parece moverse siempre al límite en algunas decisiones clave, que de no tomarse a tiempo y en forma, pondrían al país en el umbral de una crisis constitucional, como por ejemplo la aprobación presupuestal anual[1].

En este proceso, el papel de los medios de comunicación ha sido decisivo. Como ocurre en prácticamente todo el mundo, dos son los factores que explican esa influencia. Por un lado, la creación de un clima de libertades políticas y civiles favoreció la expansión y pluralidad de los medios electrónicos y escritos, pero por el otro, la política se convirtió en un buen negocio mediático. La política como espectáculo atrajo en muy poco tiempo la atención de los medios, y con ello los actores políticos incluyeron en sus equipos de trabajo expertos en imagen pública y mercadólogos políticos, han contratado empresas de cabildeo político (*lobby*), y procuran mantener una buena relación con los medios. Desde el presidente Vicente Fox hasta los dirigentes de los partidos opositores, dichos comportamientos han confirmado rápidamente que la *americanización* de la política ha sentado sus raíces en los protagonistas de la vida política mexicana.

En términos del contexto económico, la transición política pudo navegar sin muchos contratiempos en el marco de las reformas neoliberales de primera y segunda generación impulsadas por los gobiernos priístas desde 1982 hasta 2000, que produjeron estabilidad macroeconómica y confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, pero que no terminaron con el histórico rezago social y la desigualdad económica, que se manifiesta en la persistente pobreza de más de la mitad de la población rural y urbana, así como en problemas de desempleo y marginación sistémicas. Lo que se ha producido desde hace varios años es un contexto económico de «estabilidad mortecina», como lo denominó recientemente Rolando Cordera, donde la economía no crece ni distribuye, la reforma fiscal no existe, y las políticas industriales y económicas parecen agotadas y atrapadas en la búsqueda obsesiva de acuerdos comerciales internacionales, sin interés ni perspectiva sobre políticas de desarrollo que destraben y activen el empleo y permitan combatir la pobreza acumulada durante décadas. En este campo, como en otros, la joven democracia mexicana no ha producido una política de acuerdos entre los partidos, ni entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que explica la sensación de fracaso y de incertidumbre sobre el futuro luego de las elecciones presidenciales de julio de 2000, y de las intermedias de 2003.

En condiciones de estancamiento económico, de improductividad política, de importancia creciente de los medios, la clase política surgida en la larga transición mexicana ha aprendido a jugar rápidamente a las virtudes del escándalo, de las presiones y los chantajes, con sus respectivas dosis de filtraciones mediáticas, de bloqueo a las iniciativas del nuevo oficialismo, y de descalificación de éste a las propuestas y proyectos de la renovada oposi-

1. Para explorar esta idea, cf. Alonso Lujambio: «El acertijo constitucional» en *Nexos* Nº 316, 4/2004.

ción política. En esas circunstancias estallaron los escándalos de marzo, donde se vieron involucrados los dirigentes del PRD y del PVEM. Las imágenes en las que el dirigente nacional del Partido Verde, y además senador de la República, aparece negociando un soborno de dos millones de dólares con un empresario encubierto; las escenas de corrupción y codicia que mostraron al secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, apostando miles de dólares en casinos de Las Vegas; y las del principal operador político del actual jefe de gobierno del D.F., Andrés Manuel López Obrador, llenando una maleta con miles de dólares; o el delegado de Tlalpan recibiendo también miles de dólares en bolsas de plástico, ambos involucrados con un empresario de turbio pasado, mostraron de golpe la magnitud de la corrupción política en México. Esas imágenes y el contexto sociopolítico circundante han confirmado la baja credibilidad que la política y sus actores tiene entre los ciudadanos mexicanos, y la fragilidad que la idea misma de la democracia posee en la mayor parte de los ciudadanos, algo que fortalece la presencia de los fantasmas del escepticismo político y el desencanto con la democracia que recorre desde hace tiempo a las sociedades latinoamericanas.

Corrupción política y fragilidad institucional

Quizá lo primero que salta a la vista con los escándalos de marzo es la enorme debilidad de las instituciones representativas y judiciales para prevenir y enfrentar los actos de corrupción política en el México posautoritario. La histórica debilidad del Estado de Derecho y del imperio de la ley, viejos principios liberales universales, en México fueron exhibidos por miembros de la misma clase política que hizo posible el cambio de régimen. El debate público-mediático posterior a los actos de corrupción ilumina el complicado laberinto que estructura los intercambios políticos del esquema democrático que siguió a la experiencia de la alternancia presidencial de 2000: ante la contundencia de las imágenes y sus secuelas públicas y privadas, altos dirigentes del PRD renunciaron al partido, mientras que el jefe de gobierno del D.F. denunciaba ante el tribunal de los medios una conspiración en su contra, para eliminar las posibilidades de su candidatura presidencial en 2006. El dirigente del PVEM, por su parte, también declaraba haber sido objeto de una trampa[2]. Las autoridades judicia-

2. Los miembros del PRD que renunciaron una semana después de conocidos los escándalos fueron Rosario Robles, ex-dirigente nacional del partido, ex-jefa de gobierno del D.F. (1998-2000); Ramón Sosamontes, dirigente partidista y ex-delegado político en el D.F.; René Bejarano, diputado y coordinador de la Asamblea del D.F., involucrado directamente en los escándalos; y fue expulsado Carlos Imaz, delegado en funciones en el D.F., y ex-dirigente estudiantil universitario y del PRD en el D.F. En el caso del PVEM, su dirigente nacional, Jorge González, involucrado directamente en el intento de soborno, fue apoyado incondicionalmente por el comité nacional de su partido en medio de la tormenta política de esos días. Por su parte, la estrategia

les y el Congreso permanecieron durante varias semanas impávidos frente a los acontecimientos, mientras que la fuerza de los medios explotaba como nunca las sensaciones de estupor, indignación e incredulidad de la opinión pública. En unas cuantas semanas, el drama político de una coyuntura crítica mostraba los perfiles básicos de una crisis de la política y los partidos, en un contexto donde las instituciones actuaron, más que como contenedores e instancias resolutivas de los efectos políticos coyunturales, como parte del árido pasaje de un escenario no menos árido.

Esa fragilidad tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad que dichas instituciones han mostrado en los últimos años. El Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial se han convertido rápidamente en instancias con pocas posibilidades de intervención y regulación de los asuntos políticos. Es una paradoja químicamente pura: estas mismas instituciones, que ayudaron a pavimentar el largo camino de la transición mexicana, ahora se muestran debilitadas por la dinámica de confrontación y escándalo que domina la vida política nacional. Al súper presidencialismo que caracterizó el régimen político posrevolucionario, que significaba en los hechos y en el nivel constitucional una subordinación fáctica del Legislativo y de la justicia al poder presidencial, le siguió un proceso de reequilibrio donde el Ejecutivo fue acotado y limitado por los otros poderes[3]. Al mismo tiempo, el dominio fáctico de los medios se ha incrementado de manera espectacular en los últimos años; la agenda política se configura con conflictos y escándalos que aparecen mediatizados. Una especie de «videocracia», de gobierno de las imágenes, parece adueñarse de los ritmos, las pausas y las prisas de la vida política mexicana.

Pero otra de las fuentes de debilitamiento de la vida institucional proviene de los propios partidos políticos. Los continuos conflictos internos en los últimos años han sido de dominio público, y las disputas y querellas se han ventilado frecuentemente más en los medios que en sus propios órganos de dirección y competencia interna. Las violaciones a los gastos de campaña en las elecciones federales de 2000 y 2003,

del jefe de gobierno del D.F. para defenderse de los efectos políticos de los escándalos de los funcionarios de su gobierno, fue la de denunciar un complot del Gobierno Federal, en el que participaron también el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, la CIA, y dirigentes del PAN. El objetivo de este complot, según denunció y sigue denunciando López Obrador, es acabar con su popularidad entre los ciudadanos, en la perspectiva de impedir su triunfo electoral presidencial en 2006.

3. Es posible apuntar una intuición: la experiencia mexicana de cambio político puede mostrar cómo un régimen hiperpresidencialista puede dar paso en muy poco tiempo a un régimen hipopresidencialista, donde el Ejecutivo cedió tantos poderes y facultades al Congreso y a las instancias judiciales, que terminó siendo un poder muy débil para incidir en los cambios que a juicio del presidente y de su partido son necesarios para legitimar su mandato y para obtener el reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos.

implicaron sanciones económicas inéditas y severas del IFE a los principales partidos. La incapacidad para formar coaliciones y acuerdos entre las fracciones parlamentarias ha terminado por impedir cualquier reforma sustantiva relacionada con los principales puntos de la agenda económica y social elaborada por los propios partidos. Todo ello ha configurado una situación donde los principales problemas nacionales han quedado supeditados a las transacciones partidarias, lo que ha impedido no solamente su tratamiento, sino hasta su propia discusión. El resultado de todo ello, es la baja confianza de los ciudadanos y la degradación de la idea misma de la política como mecanismo, arte o instrumento para alcanzar acuerdos entre actores diversos.

Los límites del pragmatismo

El asunto siempre escurridizo, y antiguo, de los límites entre la ética, la moral y la política volvió a discutirse en el contexto del escándalo. La irresponsabilidad del comportamiento de los actores, las escenas de codicia y podredumbre que se pudieron apreciar en todos los noticieros durante semanas, rápidamente revivieron las viejas certezas en torno de la política como inmoralidad, como fuente segura e inevitable de corrupción, como el peor de los oficios contemporáneos. Los medios, en particular, avivaron el fuego antipolítico de manera constante, mientras que las elites empresariales y financieras declaraban su indignación por los acontecimientos. Más allá de esas reacciones, y de la imposibilidad práctica de analizar los hechos de la política con los ojos de la política y no de la moral, como aconsejaba el viejo Maquiavelo, los acontecimientos y sus reacciones muestran el debilitamiento de la ética en el desempeño de los partidos, y los límites que tiene, o puede tener, el pragmatismo en las relaciones políticas de los partidos y en el desempeño de las instituciones.

Como ocurre en otras latitudes, la experiencia mexicana de la corrupción política es una mezcla extraña de impunidad, debilidades institucionales y oportunismo. Vistos en términos analíticos de las teorías de la elección racional, la corrupción podría ser observada como el resultado de que existen más incentivos y recompensas que restricciones y castigos a los comportamientos corruptos. Esto configura «estructuras» simbólicas y legales que toleran o inhiben los comportamientos propensos a la corrupción, lo que explica que la moralidad de los individuos termine imponiéndose siempre a la moralidad institucional[4]. Pero vistos en términos más «impresionistas», los comportamientos inmorales exhibidos por las televisoras iluminan el rostro duro del pragmatismo político, es decir, que la clase política mexicana –o

4. Una aguda reflexión al respecto puede verse en Russell Hardin: «Moralidad institucional» en Robert E. Goodin (comp.): *Teoría del diseño institucional*, Gedisa, Barcelona, 2003.

algunos de sus actores principales– representan muy bien el principio del todo vale que parece haberse adueñado del espíritu de la época de la postransición. En otras palabras, el viejo dilema entre realismo político e idealismo es interpretado ahora en términos de pragmatismo puro y duro, cuyo horizonte temporal es el presente, el plazo cortísimo, inmediato, frente al cual pierde todo sentido y significación el mediano y el largo plazo, es decir, el futuro.

Como se sabe, los réditos de la acción de corrupción en la política son (o pueden ser) potencialmente altos para los individuos, pero también significativamente altos o desastrosos para la vida de las organizaciones y la vida política como acción colectiva, al debilitar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones representativas, o delegativas, como señalaba Guillermo O'Donnell hace tiempo. La democracia no puede resolver por sí misma los comportamientos corruptos, como tampoco es el aceite de serpiente para la resolución de muchos problemas de la vida pública. La experiencia mexicana ha mostrado los límites de hierro de la democracia, su imposibilidad para resolver los asuntos de la moral política o de la economía. Cuando la competencia política es intensa, los estímulos dirigidos a que los políticos profesionales recurran a todos los mecanismos posibles para incrementar su influencia y capacidad de decisión, se suelen imponer a los escrúpulos morales o las consideraciones éticas. En estas circunstancias, el pragmatismo se impone sin mediaciones a las responsabilidades institucionales, asumiendo y calculando los riesgos que la acción puede acarrear a quien corrompe o es corrompido. Ninguna democracia escapa a los riesgos de la corrupción, y a la permanencia o expansión de la lógica pragmática a la que generalmente obedecen. Pero el pragmatismo político no construye o fortalece las instituciones, sino que tiende a socavarlas, debilitarlas y potencialmente a destruirlas. Casi por definición, el pragmatismo no tiene futuro, sino que actúa bajo la lógica de lo inmediato, del presente eterno, y por ello suscita desconfianza, incredulidad, escepticismo entre los propios actores de la política y sus espectadores. Las instituciones, por el contrario, requieren de comportamientos estables, reglas precisas, promesas cumplidas.

La experiencia mexicana muestra cómo la institucionalidad que hizo posible la larga estabilidad semiautoritaria de un esquema político virtualmente sin competencia, y que luego dio lugar y oportunidad a cambiar de régimen sin recurrir al expediente de la violencia o de los golpes de Estado, rápidamente está siendo demolida por la clase política de la postransición, sin que esta misma construya otra institucionalidad, que permita configurar algo parecido a la consolidación de una democracia sustentable. Por el contrario, los escándalos de corrupción que

siguen sacudiendo al sistema político mexicano, parecen mostrar un proceso de desestructuración que es sustituido por el vacío institucional, lo que deja a la política en manos de los más hábiles, corruptos o demagógicos. El resultado es una lección vieja y conocida: en México tenemos ya una democracia, pero no tenemos demócratas.

Consideraciones finales

La democracia quizá tenga que ver más con los hábitos del corazón que con la razón institucional, como afirmaba el viejo Tocqueville. Si ello es así, habrá que reconocer, en consecuencia, que la democracia no forma parte de los hábitos del corazón de la clase política mexicana y latinoamericana contemporánea, por lo menos no de su mayor parte. Tal vez habrá que aceptar, al contrario, que otros hábitos, usos y costumbres anidan en el imaginario y las prácticas de nuestros políticos profesionales, cuya vigencia obedece a razones culturales, históricas o institucionales, según se quiera ver. Pero la coyuntura mexicana ha demostrado cómo la debilidad institucional, el pragmatismo de los políticos, las presiones y novedades mediáticas, y la desconfianza ciudadana, han configurado los nudos ciegos que explican las prácticas de corrupción y escándalo que dominan la situación y las perspectivas de la política en México. Sin un horizonte normativo a la vista, que imprima sentido y cohesión a la postransición, la política mexicana y el régimen que la cobija puede subsistir o de plano naufragar en medio del escándalo, la corrupción y la ineficacia político-institucional.